

De la legitimidad al “Marketing Político”: El problema de la credibilidad

ENRIQUE GONZÁLEZ CASANOVA FERNÁNDEZ

Resumen

La idea central del presente ensayo consiste en exponer algunos asuntos relativos a la legitimidad que cualquier gobernante requiere para poner en práctica con éxito su proyecto de gobierno. En este contexto, se ha buscado resaltar como un aval a la teoría y la praxis política, enfatizando que el uso de este concepto conlleva una relación intrínseca con los principios de la mercadología contemporánea.

Abstract

The central idea of this essay deals with certain aspects closely related with the legitimacy that any ruler requires to conduct successfully his own governmental project. In this same regard the idea of credibility, as it is exerted by society, appears to be of capital importance as a basic element of the theory and practice of politics because of the intrinsic relationship this concept has with the principles of contemporary mercadology.

El problema de la credibilidad como aspecto esencial para asegurar la capacidad de un gobierno y un gobernante de conducirse con éxito tiene hondas raíces históricas y sociales. Desde el punto de vista de la teoría política tampoco es un tema novedoso, aun cuando el uso del vocablo *credibilidad* pudiera parecerlo.

Si comenzamos a ubicar el concepto de credibilidad en el contexto sociohistórico en el cual inicia el mundo moderno, es indispensable analizar lo expuesto por Nicolás Maquiavelo en *El Príncipe*. Para el escritor florentino el Príncipe estaba en la obligación de darse a respetar, ya fuese por medio del miedo que su persona infundía a sus gobernados; o bien, a través de practicar una política basada en actos magnánimos que, en su momento, se tradujeran en hechos de beneficio económico, político y social para esos mismos gobernados; o bien, por la combinación de ambas conductas. La práctica que asumiera el Príncipe debía ser clara y explícita, buscan-

do de esta manera que no se prestara a confusión alguna entre sus súbditos, pues un mensaje poco convincente podría dar lugar a dudas sobre la capacidad del gobernante para encabezar el Estado.

Para Maquiavelo, cuando el Príncipe procedía sin ambigüedades y de manera decisiva contribuía a legitimar sus actos de gobierno. Podemos señalar que esa forma de actuar decisiva y sin contemplaciones, contribuía visiblemente a que se validara su conducta entre los gobernados, es decir, se le legitimaba. Sin duda de ninguna especie, el proceso de legitimación comprende al mismo tiempo la generación de una corriente de credibilidad en la capacidad del Príncipe para llevar a cabo el quehacer de gobernar. Podemos advertir que la credibilidad se genera en el mismo momento en el que determinados sectores que forman parte del universo de gobernados aprecian en el gobernante el talento y la capacidad de dirigir la cosa pública de un modo tal en el que ya ni siquiera se establece un cuestionamiento al respecto: el poderoso tiene la posibilidad concreta, objetiva y explícita de imponer sus propósitos ante los ojos de estos núcleos gobernados. Se trasciende un punto, el de legitimidad, o dicho de otro modo, el de derecho ampliamente reconocido que se le reconoce al gobernante de estar al frente del Estado, y se procede a *crear*, a avalar una forma de pensar y, sobre todo, de actuar respecto a la *politiká*, los asuntos de la polis o la cosa pública.

Quizá sea posible aventurar la hipótesis respecto a la imposibilidad de lograr un grado aceptable de legitimidad —dando por hecho de que en ningún tipo de formación social moderna existe un consenso que se logre con el pleno absoluto de todos los sectores que la integran—, si a la vez no se puede contar con un grado de credibilidad comparado por un número mayoritario de dichos sectores sociales.

Del mismo modo que Maquiavelo desarrolla una teoría relativa a la capacidad que posee el Príncipe de gobernar en la medida que cuenta con el aval del sector mayoritario de la sociedad a la cual dirige, se encuentra la teoría política de Thomas Hobbes. Al sabio inglés le preocupaba de sobremanera el establecimiento de un orden social que sirviera para transitar de la sociedad natural a la sociedad civil y, con ello, superar la guerra de todos contra todos, mientras que se imponía una organización social basada en un consenso básico que daría lugar a una vida regida por las leyes y

estaría encabezado por un árbitro supremo; el monarca, que impartiría justicia por igual a todos sus súbditos, castigaría los abusos, premiaría las colaboraciones atinadas, vigilaría que se respetara la propiedad privada, evitando cualquier tipo de atentado contra la misma y privaría a los individuos de una parte intrínseca de su individualidad y de lo que, a juicio de los jusnaturalistas, eran sus derechos naturales, conseguiría que los hombres no se destruyesen en forma definitiva, víctimas de su naturaleza egoísta.

El consenso hobbesiano implica no otra cosa sino la creación del Estado, en tanto que orden establecido o, según el vocablo inglés, *establishment*. Es posible advertir que en la teoría política anglosajona el *establishment* u orden social guardan un equivalente muy preciso con la teoría y la praxis del Estado. El Estado, en este caso, significa todas aquellas relaciones sociales, en su sentido más amplio, que garantizan una determinada convivencia social. En este sentido, el amplio conjunto de instituciones que formalizan esa práctica consensual conforman al Estado, incluidas dentro de ellas a las instituciones que de manera explícita representan al gobierno. En la teoría política vinculada a los países europeos con mayor ascendencia latina, el vocablo "Estado" y su praxis se han identificado más con la teoría y la praxis del gobierno que con todas las instituciones que definen a un determinado orden social.

Esta observación resulta pertinente cuando se está hablando del problema de la credibilidad porque, en el caso anglosajón, la credibilidad se da en torno a un orden vigente en su conjunto y no sólo en torno a un gobierno. De hecho, el gobierno podría carecer de legitimidad y credibilidad; sin embargo, los fundamentos del orden social seguirían vigentes siempre y cuando se justificaran como el producto de una amplia idea de justicia compartida.

No está de más advertir que la obra de Hobbes constituye una reflexión sobre un momento particular de la historia británica. La Gran Bretaña había estado agobiada por las guerras dinásticas que ya se prolongaban por poco más de un siglo y sus consecuencias hacían inviable cualquier tipo de proyecto compartido que pudiese repercutir en algún tipo de ventajas para la mayoría de la población inglesa. La historia de ese momento mostraba que no habían condiciones de lo que, en palabras contemporáneas, se puede calificar como desarrollo porque la sociedad como tal no existía.

Generar un consenso en ese marco significaba crear una agenda de principios compartidos que, más allá de la interpretación hobbesiana sobre las sociedades natural y civil, permitiese la reestructuración del orden social otrora perdido, mediante el amplio reconocimiento de reglas del juego básicas que, en términos generales, habrían de aceptar todos los contendientes a sabiendas de que su supervivencia, la de sus familias y sus bienes dependían de un mínimo, aunque extendido grado de tolerancia.

Podemos mencionar que si el contexto inglés del siglo diecisiete fue proclive a considerar al Estado como el orden social en su conjunto, esta posibilidad se dio porque, no obstante la guerra, la sociedad inglesa presentaba una fortaleza y coherencia que la hacían poseer una independencia amplia con respecto a las meras instituciones gubernamentales. Si seguimos de cerca a Hobbes, era la sociedad inglesa a la que le correspondía legitimarse sectorialmente y creer en sí misma para así coadyuvar al establecimiento de la paz y a retomar la dinámica social que había llevado a este reino a ser uno de los primeros Estados modernos de Europa Occidental.

El acto de credibilidad de la sociedad inglesa se habría dado al avalar el punto nodal que garantizaría el consenso: reconocer la capacidad del monarca de ejercer un poder absoluto y, a partir de ahí, instrumentar una jerarquía que sirviera para que los distintos problemas que afectaban al conjunto de la sociedad no se desbordaran en un conflicto violento y destructivo, sino se canalizaran a través de las leyes y se legitimaran y legalizaran como consecuencia del arbitrio del monarca-soberano. Había pues que creer que esa jerarquización social podía hacer que el consenso valiese la pena.

Es menester señalar que el absolutismo inglés tuvo muy poco éxito, ya que Carlos I, su más claro exponente, se conflictuó con el Parlamento, principalmente con los comunes, y fue decapitado. El triunfo de Oliver Cromwell significó en la práctica una alteración definitiva al orden propuesto por Hobbes, pero si bien es cierto que el absolutismo no tuvo mayor cabida en suelo británico, también es verdad que a la muerte de Cromwell se restableció la monarquía y que esta institución ha jugado un papel de suma importancia en la vida de esa nación, entre otras cosas porque ha podido en muchas ocasiones erigirse como el árbitro de diversos conflictos y porque los sectores más representativos de la sociedad británica ha parecido

coincidir; *crear*, al menos por un largo tiempo, en que garantiza la unidad de esta compleja nación.

Las ideas de John Locke respecto a la organización de la sociedad guardan algunas coincidencias significativas con las de su antecesor Hobbes y, también muestran diferencias profundas, seguramente por haber sido escritas en distintos tiempos —casi cuatro decenas de años de diferencia entre los últimos escritos de Hobbes y los primeros de Locke— y espacio. La sociedad británica que le toca a Locke ha superado con creces sus principales diferencias y se le ubica claramente encaminada a imponer la hegemonía mundial que habrá de ejercer hacia la primera mitad del siglo XX, es decir, se trata sin duda alguna de una sociedad que ha conseguido el orden social que durante un siglo le había faltado.

Locke reflexiona y escribe sobre la importancia que tiene un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder como una praxis elemental destinada a garantizar, de la mejor manera posible, el imperio de la justicia. El ejercicio del poder cohesionador del orden social no requiere en este caso el punto de partida que reviste, de acuerdo a Hobbes, el tránsito de la sociedad natural a la civil. Es obvio que en tiempos de Locke ese paso ya se ha dado y lo que destaca es el hecho social que significa que una de las partes básicas de la jerarquía que define al *establishment* no abuse de su poder, so pena de alterar o, en su caso, romper el delicado balance que se da como elemento insustituible en la gestación de las bases del consenso mínimo que justifica la vigencia del orden social.

Para Locke el problema no es garantizar la existencia de un gobierno, sino estructurar un orden en el cual el gobierno no atente contra el libre albedrío de cada uno de los individuos que integra la sociedad. El gobierno, así concebido, sólo se justifica en la medida en que garantiza la libertad individual; por lo tanto, el gobierno debe hacer todo lo que está de su parte para garantizar el mayor espacio posible de vida y acciones en la órbita de lo privado. Lo público se justifica en tanto que defiende a lo privado y, para que ello así suceda, una concentración excesiva de los mecanismos de poder resulta lesiva a los fines perseguidos por Locke. Sí, por el contrario, el ejercicio del poder se lleva a cabo por un conjunto de instituciones que recelan y vigilan unas de otras, aunque en el fondo se respeten lo suficiente para no destruirse, esta práctica limitará la invasión por

parte de los poderes públicos de los espacios privados y la sociedad que para Locke, igual que para Hobbes, surge de un pacto entre propietarios, seguirá adelante por una ruta de concordia y progreso.

La teoría de Locke nos enseña, desde el punto de vista de la credibilidad, que el orden social sólo puede estar debidamente asegurado si la sociedad eleva a un rango de derecho inalienable la propiedad y la capacidad de cada individuo para actuar en concordancia al mandato de su conciencia, el cual sólo termina en el punto donde comienza el mandato de la conciencia de los demás individuos con los cuales integra una formación social. Lo que Locke postula es una "república de propietarios", la cual sólo puede darse en la medida en que quienes habrán de integrarla compartan, en primer lugar, la situación de poseer algún bien y, en segundo lugar, en tanto que eleven a la categoría de valor la propiedad privada; es decir, que crean en la propiedad privada como valor fundamental y que den pie a una normatividad que permita realizar dicha república a partir de estas "creencias".

Sin duda alguna, la Inglaterra y ciertas partes de Escocia se habían convertido en los últimos cincuenta años del siglo XVII y los primeros cincuenta del siglo XVIII en espacios cuya economía era desempeñada por un número relativamente amplio de propietarios, la mayoría de los cuales carecía de títulos nobiliarios. El momento de la sociedad británica de épocas de Locke es el del franco ascenso del orden burgués, y el desarrollo intelectual de esa sociedad apuntaba hacia esos objetivos. El individualismo, tanto como sistema valorativo, como una ordenación práctica de la vida, era una realidad difundida y fortalecida. Desde luego que el núcleo de no propietarios seguía siendo franca mayoría, pero su incapacidad de sostener en ese momento una posibilidad de expresar sus puntos de vista, aunado al hecho de que, a pesar de tener todavía un rango restringido, el ascenso del orden burgués significaba una mayor movilidad social y, con ello, la posibilidad, si bien remota, de ser un propietario, fueron aspectos que fortalecieron la vigencia de un *establishment* que favorecía el ordenamiento a partir de privilegiar al individuo como tal.

La Inglaterra de principios del siglo XVIII es, asimismo, una sociedad en la cual se consolidó como expresión religiosa predominante

el protestantismo, que en sus principios teológicos y en su práctica concreta hace del individuo y de la acción individual un elemento de culto. De este modo, un sistema de valores y creencias se expande en los niveles concretos de la sociedad británica y se habrá de caracterizar por identificar la valía del orden establecido por estar comprometido con el individuo como aspecto supremo al cual se debe aspirar.

En materia política, Locke sostiene que el único camino al éxito que pudiera tener el gobierno estriba en su capacidad para permitir *ad infinitum* la conservación de esa república de individuos propietarios. No debe extrañar, por consiguiente, que el pensamiento de Locke permeara con una mayor intensidad que en Inglaterra a los nacientes Estados Unidos de América debido a que en la sociedad norteamericana había un componente más claro de valores y creencias individuales y un número más extendido de propietarios con relación a los que prevalecían en la Inglaterra contemporánea. Lo cierto es que la sociedad norteamericana no había estado nunca moldeada por las rígidas estructuras de la sociedad medieval y, aunque Inglaterra fue de los primeros países europeos en librarse de ellas, los resabios de la estricta jerarquía medieval aún marcaban con una gran claridad a la sociedad de esa isla.

En Estados Unidos podemos advertir que la creencia en la figura superior del individuo como eje en torno al cual se debía organizar la sociedad y, que con base en estos principios, el gobierno debía justificarse sólo como un perspicaz vigilante en lo interno y lo externo de un establecimiento social dedicado a asegurar la vigencia de los valores que enaltecían a la individualidad y a la propiedad privada, prevaleció como un dogma prácticamente inamovible hasta el estallido de la crisis de 1929, que marcó el inicio de la Gran Depresión que se caracterizó por ser un momento histórico en el que los valores y creencias norteamericanos más caros fueron puestos en un profundo jaque, por el grado de complejidad que manifestaban los distintos problemas estructurales que, en la tercera década de este siglo, habrían de afectar a la nación que ya entonces era la más rica del mundo.

Antes de proseguir, vale la pena detenerse en un aspecto fundamental que se comienza a hacer cada más evidente en el conjunto de sociedades europeas que mostraban una mayor integración a lo

largo del siglo XVIII y, particularmente, en las sociedades británica y francesa. Más allá de ser espacios en los cuales se consolida tempranamente el tipo de organización social que se conoce con el nombre de Estado-nación, Francia y la Gran Bretaña muestran el tránsito conflictivo que las llevaría a integrar no sólo estructuras de poder político y social que se expresan en la fórmula clásica que define al susodicho Estado-nación: un gobierno; un territorio; una población, sino también en un aspecto fundamental y complementario del nuevo orden establecido: la gestación y el desarrollo de un mercado único, cada vez más integrado.

La consolidación del Estado-nación va de la mano con la creciente importancia de la economía, en tanto que actividad integradora de los distintos sectores que coinciden en el tipo de sociedad que ha optado por la modernización de sus estructuras y que, bajo caminos distintos, avanza en la consolidación de un régimen que económica, política y socialmente puede definirse como capitalista. No es momento ahora para señalar la profundas diferencias que se dieron en las rutas británica y francesa hacia la consecución del Estado-nacional moderno y capitalista. Sin embargo, para fines de este ensayo, resulta pertinente distinguir un aspecto común a las dos formaciones: el desarrollo de sectores sociales capaces de esbozar una opinión pública independiente, o al menos no tan dependiente de los criterios del grupo gobernante, y como hecho concurrente, la aparición y rápida difusión de medios de comunicación —en este momento, un sinnúmero de periódicos y revistas que habrían de unirse como material escrito y publicado a los libros—, que impactarían en forma definitiva a sectores cada vez más amplios aunque, sin duda, disímbolos de la sociedad.

Tal y como señala el sociólogo y comunicólogo John B. Thompson al hablar de este tema, en Europa occidental y, posteriormente, en casi todo el mundo,

periódicos, panfletos y libros se produjeron en cantidades crecientes a lo largo de los siglos diecisiete, dieciocho y diecinueve; y desde el siglo diecinueve en adelante, los medios de producción y circulación en expansión fueron acompañados por crecientes y significativos niveles en el grado de liberación en Europa y dondequiera, por lo que los materiales impresos

podieron ser leídos por una cada vez más extensa porción de la población.¹

La observación formulada por Thompson debe verse de manera correlacionada con la consolidación de los mercados nacionales y, después, de los internacionales. En la medida que avanzaban las economías y, con ello, el mundo fragmentado y autárquico del medievo se hacía añicos; el impacto de la actividad económica en su conjunto habría de tocar de varias formas a los distintos sectores que integran a la sociedad. Dicho de otro modo, la economía y su manejo se convertirían en un asunto de todos, aunque, desde luego, la concepción y las perspectivas que se tenían de la economía variaban considerablemente de acuerdo a los avatares que el desarrollo de ésta iba tocando. Había, sin duda alguna, sectores beneficiados y sectores afectados, pero también se generaban expectativas no cumplidas, aciertos para unos y fracasos para otros. El desarrollo económico de cualquier sociedad no es en modo alguno un proceso ajeno al conflicto social, y las acciones y reacciones de sus componentes sociales por fuerza se tenían que expresar en estricta relación a esa problemática.

El proceso de consolidación del Estado-nacional es un proceso político a la vez que económico, social a la vez que cultural. Se puede argumentar que la vigencia del orden establecido, ya sea desde la perspectiva anglosajona que, por consecuencias propias de su devenir, preveía una acción limitada del Estado en lo relativo al crecimiento económico, ya sea desde la perspectiva europea continental o, en su caso japonesa y en las más de las veces, latinoamericana, el Estado se vio cada vez más involucrado en el manejo directo de la economía y no tanto porque poseyera directamente los medios de producción, sino porque sin su concurrencia el crecimiento de la economía habría carecido de un impulso imposible de ser sustituido.

El éxito de un Estado-nación se identificó cada vez más clara y explícitamente con el éxito de su economía. El buen o mal manejo de la economía repercutiría de manera directa en el crédito o des-

¹ John B. Thompson, *Ideology and Modern Culture*, Stanford California, USA, Standford University Press, 1990, p. 1.

crédito del grupo gobernante. A la legitimidad que necesitaba el gobernante para llevar a cabo su tarea de regir los destinos jurídico-políticos de la sociedad que encabezaba, se le añadió la expectativa respecto a su capacidad para conducir los asuntos en materia económica. Con el paso del tiempo, la economía se habría de convertir en una bandera clave para hacerse o para permanecer en el control de la política. El impacto generalizado que sobre el ente social tiene la economía se convertiría en un punto riesgoso, entre otras cosas, porque su buen éxito no dependía únicamente de la buena voluntad del gobernante. Lo incierto del manejo económico se habría de traducir en un punto nodal destinado a alimentar las creencias sociales en el sentido de si el gobernante o el aspirante a serlo contaba con la pericia suficiente para hacer del tema económico una oferta y, además, un hecho social capaz de ser alcanzado o sostenido y ampliado.

Aquí es preciso enfatizar que, tal y como se dijo líneas arriba, la relación de los distintos sectores sociales para con la economía varía y, en ocasiones, lo hace de manera ostensible. Esta situación se convirtió en un imperativo a superar: el gobernante o, en su caso, el pretendiente a serlo, tuvieron que generar un clima de confianza de amplio espectro a fin de satisfacer si no a todos, porque eso resultaba imposible de lograr, sí al menos a un conjunto de sectores lo suficientemente amplio como para lograr el aval a su gestión o a su intento de hacerse con el poder. La única manera de lograrlo era a partir de internalizar en la población, la creencia de que la fórmula que poseían era la adecuada.

La historia del desarrollo del Estado moderno es a la vez la historia de la creciente importancia de la economía a nivel nacional e internacional. Las economías se hicieron objeto de un casi culto reverencial fundamentalmente por dos razones:

1. Porque su existencia y práctica afectaba al conjunto de una colectividad.

2. Porque el conocimiento de esta actividad no podía ser siempre homogéneo y objetivo.

Vale la pena advertir que con el advenimiento de la revolución industrial, se alteraron creencias y prácticas del papel del Estado y los gobiernos en torno a la acción económica. Tal y como afirma J.K. Galbraith, el Estado mostró simpatía creciente a las necesidades y deberes de los industriales y, en gran medida, se convirtió en una

extensión de su brazo. Sin embargo, no fue el Estado el único susceptible a los cambios producidos por la revolución industrial, pues el impacto de esta radical transformación en los modos de producir alteró el *modus vivendi* de la población en su conjunto. El éxito o el fracaso del modelo industrial condicionarían formas de la vida social, tanto de los sectores poblacionales que de un modo directo participaban de este proceso, como de aquellos sectores que de manera indirecta sufrían las repercusiones del mismo.

No es exagerado hablar del impacto de la industria como una revolución en toda la extensión de la palabra porque, a partir de su aparición, primero en Inglaterra y luego en otras partes del mundo, las organizaciones sociales experimentarían una mutación, cuyo único punto de comparación pudiese ser el tránsito de la sociedad nómada a la sedentaria. La nueva organización surgida de la revolución industrial implicaba modificaciones en las maneras de pensar y actuar. Una nueva política, una forma innovadora de ver a la sociedad, una distinta cultura y, por ende, otros valores y creencias sociales se conjuntan para conformar esa incipiente, pero poderosa expresión social. En el plano valorativo, el economista escocés Adam Smith identificaría la búsqueda de todo autointerés económico con el bien público.² Lo cierto es que numerosos sectores del público también así lo hicieron, ayudados sin duda, por los panegristas de la industrialización, pero también por la posibilidad de constatar en términos materiales las ventajas que ésta suponía.

No obstante, es del todo falso suponer que la industrialización que, por otro lado, es sólo un pilar, sin duda básico pero no exclusivo, de un fenómeno social todavía más amplio que es la modernización de las sociedades y que incluye la presencia de otros aspectos altamente significativos como la urbanización; el desarrollo de medios y vías de comunicación; una mayor integración del planeta; la conformación de la sociedad de masas, etcétera, fuese un proceso aceptado con igual simpatía por todos los componentes de la sociedad.

La revolución industrial creaba bases concretas para la ruptura del mundo tradicional. El advenimiento de la industria coadyuvó a pro-

² Véase Adam Smith, *The Wealth of Nations*, Chicago, USA, University of Chicago Press, 1975.

fundizar un agudo conflicto entre las formaciones urbanas y las rurales con hondas consecuencias para la industria de las distintas naciones que se hacían partícipes de este fenómeno. Los primeros hijos de las sociedades industriales nos muestran contradicciones tales como las de la modernidad contra tradición; el mundo urbano opuesto al mundo rural; la dinámica contra la estática; el progreso contra el atraso; la producción industrial contra la producción agraria, etcétera.

Las rupturas propias de este intenso periodo de cambio condujeron, por un lado, a la aparición de lo que muy bien podría definirse como “clases emergentes”, es decir, los proletariados industriales o las clases medias; pero, por otro lado, la alteración de las bases del *ancién régime* habrían de dar pie a un conjunto de clases desplazadas, esto es, sectores otrora favorecidos por el orden social de férrea jerarquía que comenzaba a hacerse en gran medida obsoleto.

Sólo que es necesario advertir que la prontitud de los cambios en la organización de la vida económica difícilmente son acompañados a una misma velocidad por los cambios en la vida social. Las sociedades se mueven con lentitud y los cambios y mutaciones a veces se resisten incluso con la violencia abierta. Desde el criterio de la credibilidad, era obvio que no todos los sectores sociales compartían la ciega fe en el progreso que suponían la modernización y la industrialización. A las visiones de optimismo exacerbado de pensadores como Turgot y Condorcet, correspondían las peticiones de dismantelar el aparato industrial al que se le acusaba de alterar negativamente el orden social y recrear en su lugar la jerarquía prototípica del medievo. Louis de Bonald y Joseph De Maistre se inclinaban por esta alternativa.

Para el fundador de la sociología, Augusto Comte, las cosas no resultaban tan simples, pues el mundo no podía ya vivir sin la concurrencia de la industria y sus innovaciones y tampoco sin poseer un orden social adecuado que, a partir de la capacidad de combinar la estática y la dinámica, o bien, el orden y el progreso, garantizara una convivencia pacífica y cooperativa entre los distintos sectores que componían a la sociedad.

Para el autor de la Ley de las tres etapas, la solución a las tensiones derivadas del conflicto entre lo nuevo y lo añejo sólo podían solventarse si se creaba un sistema de valores y una normatividad social

capaz de proponer un nuevo orden social con una jerarquía en cuya cima se ubicasen los "sacerdotes" del mundo moderno: los científicos y los industriales. Asimismo, Comte sostenía que el desorden social era ocasionado en la medida en que se carecía de una unidad mental en torno a una forma definida, explícita y nítida de pensar. De este modo, los nuevos valores y normas sociales debían ser aceptados por todos los sectores sociales sin que para ello importara el lugar que les tocase ocupar en la jerarquía social. Dicho de otro modo, Comte consideraba indispensable desarrollar a fondo un amplio y extendido proceso de credibilidad en un orden sabio y reflexivo que se caracteriza por combinar adecuadamente los principios de la dinámica y la estática o los del orden y el progreso.

Observador agudo de la realidad de su tiempo, Augusto Comte apreció en todas sus consecuencias el carácter específico de la sociedad de masas como un elemento definitorio de la sociedad industrial, razón por la cual no dudó en sostener la imprescindible necesidad de crear un sistema de educación que, por sus dimensiones, estuviera en la posibilidad de introyectar los valores, normas y creencias del nuevo orden a los distintos sectores de la sociedad, sin importar si formaban parte de la clase dirigente o de lo que él llamaba el "proletariado", núcleo que a sus ojos estaba integrado por todos aquellos que de acuerdo al lugar que guardaban en la jerarquía de la sociedad industrial les correspondía asumir el papel de gobernados o subordinados.

Quizá muy pocos autores hayan sido tan definitivos como Comte en cuanto a la necesidad de instrumentar un sistema de valores que permitiese asegurar un acto generalizado de credibilidad en la vigencia y valía del nuevo orden social. Habría que puntualizar que para el sociólogo francés la sociedad era un ente único e indivisible y que, en tanto que su unidad, tal y como se advirtió líneas atrás, sólo se podía garantizar por la unidad de pensamiento, era indispensable lograr este punto porque de no conseguir ese propósito, la sociedad no habría de cambiar hacia otro orden, sino simplemente desaparecería sin dejar rastro alguno y, con ello, fenecería la civilización en su conjunto.

Emile Durkheim compartió con Augusto Comte algunas premisas esenciales respecto a la sociedad como, por ejemplo, la idea de que

la sociedad era un organismo que evolucionaba y que los valores y normas sociales formaban un aspecto insustituible, destinado a mantener la integración de la estructura de la sociedad. Pero, para Durkheim, habían también importantes diferencias como la existencia no de una, sino de un sinnúmero de sociedades de todo tipo sobre la faz de la tierra; o bien, como la posibilidad de que una sociedad en crisis y, por ende, con unos valores y normas de poco impacto social por su desfase, pudiera sin embargo reestructurarse y generar el conjunto de valores y normas adecuadas para guiar a la sociedad según el momento que estaba viviendo.

Durkheim, asimismo, destaca un aspecto central de la sociedad moderna: su carácter complejo y plural. A diferencia de Comte, el autor de *El suicidio* sostiene que la manera de mantener unida a la sociedad no estriba en hacer que todos sus componentes, independientemente de si se encuentran al tope de la jerarquía o en su base, compartan el mismo conjunto de valores. Al contrario, los componentes heterogéneos de la sociedad moderna se adhieren a distintos valores o, en todo caso, pueden compartir un mismo valor, pero lo interpretan de distintas formas. Para Durkheim el principal problema no es como lo interpreten sino que en términos reales y objetivos lo consideren un valor porque en el momento en que los valores dejan de tener un significado se produce un proceso de anomia. Las causas de la anomia son, a la vez, muy dispares y se originan por la insatisfacción que se produce al no lograrse ciertas expectativas. Sin duda alguna, en el mundo moderno una crisis económica es un factor que conduce a la generalización del proceso anómico que, aun cuando siempre está presente en la sociedad, sus expresiones se reducen a las de carácter individual o de grupos muy pequeños. La incapacidad de la economía para garantizar mínimos de bienestar y crecimiento trastoca al sistema de valores, debido a que se pone en entredicho una oferta social que habría de alcanzarse si se sigue una conducta determinada. Siguiendo a Durkheim, la proliferación de la anomia equivale a la pérdida de credibilidad.

En este sentido, el problema de la economía adquiere considerables dimensiones porque su importancia ha impregnado clara y definitivamente el sistema de valores y, en consecuencia, la normatividad social que sirve para instrumentarlo.

En este punto, es posible advertir que, de Adam Smith a Dur-

kheim, el mundo moderno sufrió una interrelación cada vez más clara entre los procesos económicos, políticos y sociales y que la vida de las sociedades se habría de marcar en forma compleja por esta combinación.

Dicha transformación implicó entre otras cosas que los mercados, no sólo desde el aspecto económico, sino desde los criterios político y social, ganaran un espacio que en mucho definiría la conducta de las sociedades y de los diversos sectores que las integran. Habría que señalar que a lo largo del siglo XX la complejidad, heterogeneidad y pluralidad de las sociedades modernas no sólo no se detendría, sino que se profundizaría y, en este contexto, la importancia de las relaciones económicas crecería de tal suerte que se convertiría en un punto nodal de la agenda cotidiana, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.

En lo que respecta a los procesos de credibilidad, éstos se vincularon de manera prioritaria a aspectos concretos como la viabilidad económica, la consecución y la praxis de derechos políticos y el bienestar social. Sin embargo, es indispensable advertir que sólo en épocas de crisis muy profundas la falta de credibilidad ha contribuido a que este fenómeno alcance al amplio conjunto de sectores sociales que coinciden en la sociedad moderna. *De hecho, la credibilidad de ciertos sectores siempre ha contrastado con la incredulidad, el escepticismo, la apatía o el pesimismo de otros actores individuales y colectivos.*

Además, habría que reflexionar en el hecho de que el debilitamiento de procesos tales como el crecimiento de la economía o de un orden jurídico-político determinado son manifestaciones que se muestran acompañadas de expresiones de credibilidad hacia otro tipo de ofertas: una reestructuración de la economía o del gobierno o de ambos; la aparición de un movimiento alternativo que muy bien puede estar dirigido por un líder mesiánico; el surgimiento de nuevas ideas y, en torno a ellas, de nuevos valores, etcétera.

Durante los años que duró el periodo entreguerras (1918-1939), el mundo industrial experimentó momentos contrastantes en torno a la credibilidad. En el conjunto de países desarrollados, las democracias que habían surgido de los Tratados de Neully, Trianon, Saint Germain y Versalles muy pronto se vieron amenazados por el caos económico que se dio en los nuevos Estados-nación del Centro y el

Este de Europa y, asimismo, en Alemania, como por las dificultades de desarrollar un proceso democrático en países con una fuerte tradición autoritaria que, además, había quedado intacta en sus cimientos y dolida por la dureza de las condiciones de paz, impuestas por los aliados o por la incomprensión de los mismos, para desarrollar una alternativa económica que funcionara. El desenlace a esta situación en esta parte de Europa fue la gestación y luego la praxis del fascismo y el nazismo. Ambas expresiones totalitarias definían un nuevo sistema de valores y creencias que con mucho trascendían a las formas tradicionales del autoritarismo y en sus aspiraciones de controlar toda expresión vital, fuese ésta de carácter público o privado, sus esfuerzos sólo eran comparables a los de la otra versión del totalitarismo: el soviético de José Stalin.

Difícilmente se podría argumentar algo en contra de los totalitarismos fascista, nazi y comunista con relación a su capacidad de erguirse, ya por la persuasión, ya por el uso de la violencia, en sistemas que generaban un grado extendido de credibilidad entre sus seguidores, los cuales en determinados momentos sumaron multitudes, pero sería una exageración desmedida intentar el estudio de este fenómeno de credibilidad como un hecho social compartido por todos los sectores de la población. No sólo no se adhirieron al nazismo, al fascismo y al stalinismo los grupos directamente amenazados por estos movimientos, sino tampoco lo hicieron algunos actores sociales que inclusive podrían haberse visto beneficiados por las dictaduras totalitarias.

En el caso de Estados Unidos de América, también durante el período entreguerras es significativo. De 1919 a octubre de 1929, el progreso parecía una condición intrínseca de la sociedad norteamericana y el crecimiento económico de la época se identificaba como la plena consecución del sueño forjado por los peregrinos y los pioneros que habían consolidado a esta nación. La idea de la no intervención del Estado en el desarrollo de la economía había alcanzado casi el nivel de un dogma y la fortaleza de la ya entonces primera potencia económica y militar del mundo, le obnubilaron la vista para ver al resto del planeta. Pero, a partir de la debacle bursátil de 1929, la sociedad norteamericana habría de experimentar la Gran Depresión, que no sólo era una contracción económica, sino una profunda crisis en torno al conjunto de valores, creencias y nor-

mas sociales que se encontraban en los fundamentos mismos de este país. A pesar de la crisis económica y social, el edificio político de Estados Unidos de América quedó intacto y, a través de un proceso electoral sumamente peleado, Franklin D. Roosevelt consiguió derrotar al presidente Hoover y garantizar una corriente de simpatía en amplios sectores de la población norteamericana que lo llevaron a ganar cuatro elecciones consecutivas, lo que constituye un hecho inédito en la historia de esta nación.

Es necesario señalar que no obstante el éxito de las políticas roosveltianas destinadas a sacar al país de la postración económica y, de acuerdo al vocablo de Durkheim, de la anomia social en la que se encontraba inserto, la credibilidad con que el núcleo mayoritario del electorado norteamericano correspondió a su presidente, no pasó, en términos globales, de un 60 por ciento del total de la población con la facultad de votar. En las elecciones de 1944, Roosevelt llegó a perder la mayoría en el Congreso y a lo largo de los trece años que estuvo en la presidencia, sus políticas reformistas sufrieron el embate de la Suprema Corte que, en la mayor parte de las veces, las declararía inconstitucionales.

Un aspecto que debe mencionarse con relación a los procesos políticos que se distinguieron en las décadas de los veinte y los treinta del presente siglo es que, tanto en Europa como en Estados Unidos, se recurrió al empleo masivo de los medios de comunicación masiva de mayor impacto en la época: la radio, al cual sumaban el uso del cine y de la prensa. A ello es posible agregar que estos dirigentes políticos del periodo entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial manejaron un grado de cercanía para con sus seguidores, en lo particular y, para el resto del público en lo general, teniendo como objetivo principal hacer que las masas, complejas y heterogéneas en su conformación, encontraran principios básicos que les permitieran identificarse con las propuestas políticas y, de este modo, contribuir al carácter creíble de sus proposiciones.

Es obvio que, en este manejo, habían diferencias que resulta indispensable precisar: mientras las ofertas del totalitarismo en su lucha por lograr el poder y en el ejercicio del mismo pretendían anular en forma definitiva al conjunto de fuerzas que se les oponían, lo que a la postre significaba controlar en términos absolutos el espacio social, la oferta democrática de F.D. Roosevelt se daba en un marco

de competencia abierta con otras fuerzas, donde una de ellas, la representada por el Partido Republicano, se encontraba en una posibilidad objetiva de competir y ganar el proceso electoral. Ni siquiera en el momento de mayor popularidad del modernizador del quehacer político en Estados Unidos hubo intento alguno por suprimir la heterogeneidad de las fuerzas contendientes y tampoco de imponer un dogma único en la conducción del Estado, la economía y la sociedad.

A partir de Roosevelt en Estados Unidos y, después de Churchill y De Gaulle en la Gran Bretaña y Francia durante el lapso en el cual se dio la Segunda Guerra Mundial, el diálogo político en las sociedades industriales, capitalistas y democráticas se habría de dar en medio de un tono de intensa competencia en el que las reglas del mercado en su fase económica habrían de trascender de manera ostensible al ámbito de la política.

El fin de la guerra significó, entre otras cosas, el triunfo de una peculiar organización de la sociedad que favorecía la consecución y consolidación de un tipo de mercado caracterizado por el consumo masivo.

El éxito de las políticas benefactoras del Estado providencia, permitieron a los viejos capitalismo europeos modernizarse y, con el transcurso de los años, desarrollar poderosos y estables mercados internos que les permitieron equipararse en lo relativo a su capacidad de producción y consumo con el de Estados Unidos.

A diferencia de la posguerra de 1918, la que comenzó en 1945, significó para Estados Unidos, sus aliados europeos y el Japón una época de auge económico que definió las mayores tasas de producción industrial que haya experimentado la historia de la humanidad; los mayores flujos de comercio; las más grandes concentraciones poblacionales, etcétera. Desde la perspectiva de la concepción ideológica de la Guerra Fría, se estaba ante el triunfo claramente definido del libre mercado, aun cuando entre los europeos y el norteamericano existieran visibles diferencias en el manejo y la orientación de los mismos, dándose en aquéllos un mayor grado de ingerencia directa por parte del Estado.

La bonanza de la posguerra que se extendió en términos generales de 1948 a 1975, no hizo olvidar las penurias que la mala economía había ocasionado a los europeos y los norteamericanos en el

periodo entreguerras y que, en gran parte, había sido un elemento decisivo para que estallase la Segunda Guerra. De este modo, todos los partidos políticos, fuesen estos centralistas, izquierdistas, democráticos o derechistas, hicieron parte ineludible de su agenda y de su oferta el tema económico.

Vale la pena advertir que la práctica de los diferentes partidos políticos de las naciones capitalistas industrializadas coincidió de una manera muy amplia que trascendió con creces a los lineamientos ideológicos que definían a cada formación. Las tres décadas que siguieron al término de la guerra han sido definidas por Ralf Dahrendorf como los años del gran "consenso socialdemócrata". Conservadores, liberales y socialistas se adhieren a las políticas del Estado de Bienestar y sólo expresaban ligeras diferencias de matices. El gran consenso socialdemócrata equivalió a un generalizado índice de credibilidad entre los habitantes del Primer Mundo. Dicha credibilidad parecía no estar cuestionada de manera significativa en el contexto de las potencias industrializadas. Por otro lado, el punto de referencia lo daban los países del socialismo real limitados en sus libertades políticas y con un crecimiento económico muy alejado del que experimentaban los países del Occidente industrializado.

Hubieron naciones que de manera aislada experimentaron graves problemas de credibilidad, no en materia económica, pero sí en materia política. Francia, agobiada por la crisis de Indochina en 1954 y Argelia en 1958, no pudo tolerar el engranaje jurídico-político de la Cuarta República y ésta voló por los aires, dando paso también en 1958, a la Quinta República del general de Gaulle. Sin embargo, las fisuras al consenso socialdemócrata se dieron, en Europa, por lo incosteable que se volvió el modelo benefactor y, en Estados Unidos, por lo caro del modelo y por las consecuencias que a nivel interno produjo la Guerra de Vietnam.

En la medida que el amplio modelo socialdemócrata se debilitaba, las tesis favorecedoras a un desarrollo económico que se basara más en la libre concurrencia de las fuerzas del mercado y en una significativa disminución de la intervención estatal, cualquiera que ésta fuera, cobraron auge. Los nuevos planteamientos teóricos que formaban algunos aspectos del liberalismo decimonónico, principalmente el vinculado a Herbert Spencer, en lo social y a Walras en lo

económico, habrían de insistir en que la lucha política era, asimismo, una contienda que se daba en el seno del mercado y bajo las pautas directivas del mercado.

Es preciso recordar que F. D. Roosevelt fue un político innovador como presidente y también como candidato a la presidencia de su país. Roosevelt fue el primer aspirante, primero a la nominación de su partido, el Demócrata, y después a la presidencia de Estados Unidos, que desarrolló un campaña, cuya puesta en marcha incluía todos los componentes de lo que muy bien podría definirse como el estilo moderno de hacer política. El candidato Roosevelt supo combinar el manejo exhaustivo de los medios de comunicación masiva a su alcance —radio, cine, prensa—, con recorridos a lo largo de toda la Unión Americana, usando para ello el ferrocarril, el autobús e, inclusive, el avión, siendo el primer aspirante presidencial norteamericano en usar este medio de transporte. Asimismo, Roosevelt buscó establecer el mayor contacto directo posible con sus electores potenciales, mostrándoles una imagen que ya había dado a conocer como gobernador del estado de Nueva York en los años de 1930, 1931 y 1932, cuando, junto a su infatigable y participativa esposa Eleanor, visitaba una y otra vez los campamentos formados por las víctimas de las crisis, asistiéndolos en la medida de sus posibilidades.

La intensa campaña desarrollada por Roosevelt, quien ya para el año de 1932 era un hombre lisiado y confinado las más de las veces a una silla de ruedas, contrastaba con la imagen adusta y tradicional de Hoover que asemejaba más a un político y nada habituado a las opciones que generaba la radiodifusión. Hoover, por otra parte, había sido acusado por un sector importante de la opinión pública norteamericana de ser poco o nada sensible a las consecuencias devastadoras de la Gran Depresión y al sufrimiento que experimentaban miles de familias.

Una cosa quedó clara: el candidato Roosevelt contó con el apoyo decisivo del electorado en la medida en que supo crear una convincente imagen que lo mostraba como un hombre condolido por el sufrimiento de sus compatriotas y que expresaba un compromiso con los sectores sociales lastimados por la recesión para encontrar alternativas viables, al conjunto de problemas que los agobiaban. De hecho, las políticas públicas que Roosevelt instrumentaría desde el

inicio de su primer gobierno para salir de la crisis no constituyeron parte fundamental de la oferta planteada al electorado norteamericano durante la campaña, ya que los discursos que el candidato dio en su lucha por alcanzar la presidencia, relativos a los temas económicos y sociales fueron vagos y ambiguos, haciendo énfasis únicamente en la solidaridad que, de ganar la carrera electoral, habría de mostrar para con sus gobernados.

El manejo de la imagen pública del patricio Franklin Delano Roosevelt le llevaría al triunfo y, posteriormente, a ejercer un liderazgo sobre el Congreso con una fortaleza tal que muy pocos presidentes norteamericanos pueden presumir de haberlo logrado. Desde el particular punto de vista del presente ensayo, el Roosevelt demócrata fue capaz de generar en torno a su figura una credibilidad lo suficientemente amplia y compartida, de suerte tal que pudo ejercer un liderazgo que guió a Estados Unidos hacia una nueva etapa de bienestar y, a la vez, le permitió conducir a su país y a buena parte del mundo durante los aciagos años de la Segunda Guerra Mundial.

No es aventurado decir que en lo que respecta a las campañas políticas, la de Roosevelt permite hablar de un manejo anterior y otro posterior al utilizado por este peculiar político norteamericano.

Los derroteros de la lucha política democrática impuestos por Roosevelt se generalizaron al comienzo de la segunda posguerra. Una nueva empresa, la del *marketing político*, cobró un auge inusitado y se volvió parte imprescindible de las estrategias partidistas para alcanzar el poder.

Las mínimas diferencias expresadas por los políticos de la posguerra se tradujeron en un aspecto que condicionaría a sus contendientes a explorar una imagen que, a su vez, diese pauta a un mayor grado de credibilidad en el electorado. La posibilidad, que en sí misma es un producto sujeto a la aceptación para conseguir un grado adecuado de consumo, buscó someter las tesis y principios políticos a un problema técnico en el que se privilegiaba una imagen glamorosa. Claro que los principios ideológicos no estaban ausentes, pero como el margen de acción era reducido, el esfuerzo político se presentaba como un mero problema de mercado y como un objeto de consumo las más de las veces inmediato, marcado por las elementales leyes económicas de la oferta y la demanda.

Con el agotamiento del Estado de Bienestar o providencia, hacia la segunda mitad de los setenta y el principio de los ochenta, países como la República Federal Alemana, Estados Unidos y, de manera muy particular por ser pionero, la Gran Bretaña, se dio la ruptura del consenso socialdemócrata y, en su lugar, volvió a surgir la idea de la infalibilidad del mercado y su mano invisible; el *marketing político* cobró nuevos bríos. Entre los puntos sobresalientes de la nueva ideología del mercado —mezcla por demás peculiar de principios liberales y conservadores—, algunos politólogos norteamericanos y británicos quisieron ver en la política y en los políticos un producto más sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Se llegó a mencionar explícitamente la existencia de un mercado político en el que las ideologías y sus exponentes serían expuestos al gusto de un consumidor que los aceptarían o rechazarían como cualquier otro bien. En un contexto de abierta competencia, donde se consideraba al mercado como una constante casi inalienable en su vigencia, las ideas políticas y, de una manera principal, los hombres y mujeres que habrían de sustentárselas, tendrían que ser “vendidos” según parámetros de una publicidad competitiva y agresiva, siendo uno de sus objetivos generar una credibilidad adecuada para el “producto” a comercializar.

Al tratarse, por otro lado, de una sociedad consumista, era obvio y predecible que dicho producto podía perder vigencia: ser insertible, en el caso de las ideas, o hasta pasar de moda, en el caso de las personas. El *marketing político*, en el lenguaje de los publicistas, parecía haber encontrado su “nicho de mercado” y lo explotaría en la medida de sus posibilidades.

Es posible advertir que el fin de los ochenta y el comienzo de los noventa han sido los años en los que el derrumbe de los “muros”, la crisis de las ideologías del condominio bipolar de la posguerra, la contracción económica de buena parte del mundo, la reaparición de algunos fantasmas como el fascismo, la xenofobia, los integrismos religiosos y los nacionalismos excluyentes, etcétera, condicionan a la ciudadanía de muchos países al consumo indistinto de productos, entre ellos las ideas políticas, buscando más que un compromiso de participación, algo en que *creer*, aunque su adhesión sea efímera, porque en los tiempos de confusión y caos, la reflexión y la medida parecen ser bienes muy escasos en el mercado.

Bibliografía

- Dahrendorf, Ralf, *El conflicto social moderno*, Madrid, Mondadori, 1989.
- Thompson, John B., *Ideology and modern culture*, Stanford, California, USA, Stanford University Press, 1982.
- Hirshman, Albert O., *Shifting involvements*, Princeton, New Jersey, USA, Princeton University Press, 1982.
- Galbraith, John Kenneth, *Anatomía del poder*, México, Edivisión, 1986.
- Lindblom, Charles E., *Politics and markets: The world's political economic systems*, New York, Basic Books, USA, 1977.
- Smith, Adam, *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, Chicago, USA, University of Chicago Press, 1977.
- Keynes, John M., *Teoría general de la ocupación; el interés y el dinero*, México, Fondo de Cultura Económica, 1971,
- Shumpeter, Joseph A., *Capitalismo, socialismo y democracia*, Madrid, Editorial Aguilar, 1971.
- Heffer, Jean, *La grande depression. Les États-Unis en crise (1929-1993)*, París, Francia, Editions Galimard, 1991.
- Maquiavelo, Nicolás, *El príncipe*, México, Editorial Porrúa, 1971.
- Polanxi, Karl, *La gran transformación*, México, Juan Pablos Editor, 1975.
- Gilbert, Felix, *The end of the european era, 1890 to the present*, New York, USA, W.W. Norton & Company, 1984.
- Hobbes, Thomas, *Leviathan*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
- Locke, John, *Of the state of nature*, London, Great Britain, Penguin Books, 1977.
- Comte, Augusto, *The positive philosophy*, London, Great Britain, Trübner, 1951.
- Durkheim, Emile, *De la division du travail social*, Paris, Francia, PUF, 1980.